



## **La Monarquía viola Derechos Humanos: El caso Español**

*Monarchy Violates Human Rights: The Spanish Case*

*Artículo recibido el 12 de junio de 2014*

*Artículo aceptado el 2 de julio de 2014*

Guillem Compte Nunes<sup>1</sup>

Doctorando del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México

C/ Patricio Sanz 1917, Dpto. 501

Col. Acacias, Del. Benito Juárez, México DF 03240

+52 1 55 48706309

[gcompte@adam.es](mailto:gcompte@adam.es)

### **Índice**

1. Introducción – 2. Planteamiento del problema – 3. La igualdad – 4. La igualdad en la CE y en el Derecho internacional – 5. Conclusiones – 6. ¿Qué hacer? – 7. Bibliografía

### **Resumen**

Hoy en día la legitimidad final de una norma jurídica no se halla en su historia, lógica o autoridades sino en su ajuste a los principios democráticos y a los derechos humanos. Este trabajo argumenta la incompatibilidad de la institución monárquica, en concreto la monarquía española, con el paradigma internacional de los derechos humanos. La monarquía viola los derechos humanos de (i) la dignidad humana, (ii) la no discriminación por razón de nacimiento, (iii) la igualdad ante la ley y (iv) la igualdad de participación política. Se propone que para superar la monarquía incumbe construir una representación social de esta institución informada por su violación de derechos humanos.

### **Palabras clave**

Monarquía, derechos humanos, violación, España, igualdad.

---

<sup>1</sup> Quiero agradecer los comentarios de Mónica González Contró en la preparación de este artículo.

## **Abstract**

*Today final legitimacy of a legal norm is not found in its history, logic or authorities but in its fit with democratic principles and human rights. This paper argues the incompatibility between the monarchical institution, specifically the Spanish monarchy, and the international paradigm of human rights. Monarchy violates human rights of (i) human dignity, (ii) non-discrimination by birth, (iii) equality before the law, and (iv) equality of political participation. It is proposed that to overcome monarchy it behooves to build a social representation of this institution informed by its violation of human rights.*

## **Keywords**

*Monarchy, human rights, violation, Spain, equality.*

## **1. Introducción**

En la historia moderna se distinguen dos movimientos jurídico-políticos; por un lado, la emergencia del estado-nación; por otro lado, el desarrollo de la democracia y del Derecho internacional. Aunque la democracia se ha arraigado en el estado-nación, el espíritu democrático es trasnacional y está ligado al paradigma de los derechos humanos, cuya construcción y custodia pertenecen a la comunidad política internacional, compuesta por Estados miembros<sup>2</sup>.

Estos dos procesos históricos van cristalizando en documentos jurídicos que pretenden regular la convivencia humana a nivel nacional e internacional. Así, las constituciones estatales proporcionan el marco legal del cual derivar leyes que promuevan el orden y bienestar social. Y los tratados internacionales recogen el consenso internacional sobre derechos y democracia, que a su vez condicionan la jurisprudencia nacional<sup>3</sup>.

Tratándose de evoluciones que se orientan a ideales, encontramos siempre lagunas, contradicciones y fallas en su práctica. Sin embargo, mientras que las constituciones se presentan como productos históricos con mecanismos de actualización y efectivamente sufren cambios, los tratados internacionales a partir de la *Declaración Universal de Derechos Humanos* (DUDH) han adquirido hegemonía y cierta aura de irreformables<sup>4</sup>.

En cualquier caso, el Derecho internacional y los mecanismos de control de su aplicación ejercen desde 1948 una clara presión sobre los Estados para que establezcan y/o vayan armonizando las constituciones según éste. En otras palabras, la comunidad de Estados entiende que una carta magna debe propugnar el respeto a los derechos humanos y la consecución de los valores democráticos. No se trata sólo de una expectativa moralista sino que puede ir ligada a premios y castigos de índole socioeconómico y jurídico-político.

Desde luego existen violaciones estatales de los derechos humanos que representan afrentas intolerables para la comunidad internacional, mientras que otros quebrantamientos pasan desapercibidos o incluso son consentidos. Como en cualquier ámbito humano, media cierta distancia entre el discurso y la práctica, en el que la (geo)política maniobra para satisfacer unos u otros intereses. En este sentido,

---

<sup>2</sup> Dienheim (2009), Nash (2009).

<sup>3</sup> Ripoll (2007), Toro (2005).

<sup>4</sup> Lo cual no está exento de críticas (Color, 2009).

la acusación de violar derechos humanos representa una táctica común en las guerras (o escaramuzas) frías entre Estados<sup>5</sup>.

Una forma particularmente grave de violación de derechos humanos consiste en integrar dicha violación al texto constitucional. No se trata, pues, de desacatos que se dan en la imperfecta práctica de una constitución respetuosa, sino de transgresiones sancionadas a priori, por el marco legal del país<sup>6</sup>.

Este trabajo tiene por objeto examinar si la monarquía parlamentaria existente en Europa Occidental viola los derechos humanos. Aunque me centraré en un análisis de la monarquía española, gran parte de los argumentos aplican a otras monarquías hereditarias del continente europeo.

## 2. Planteamiento del problema

¿Puede una norma constitucional violar alguno de los derechos humanos? Para responder a esta pregunta se requiere determinar el marco jurídico que permite juzgar la norma constitucional en tanto a su compatibilidad o no respecto al derecho humano en cuestión. Básicamente, disponemos de tres opciones: utilizar la propia constitución, el Derecho internacional o el Derecho comparado.

En primer lugar, un Estado que se pretenda democrático debe contar con una constitución que explice los derechos humanos, los principios democráticos y la articulación de ambos en el ordenamiento jurídico. Dado el carácter coyuntural y políticamente interesado del nacimiento de una carta magna, cabe la inclusión de antinomias, sutiles o aparentes, entre ciertas normas constitucionales. Aunque la constitución contiene disposiciones para su propia mejora, se ha construido para la estabilidad política, es decir, la reforma constitucional en general resulta mucho más ardua que la introducción o modificación de leyes. En el caso de España, sólo ha habido dos reformas desde su redacción en 1978, ambas motivadas por la Unión Europea (UE).

En el camino de la identificación de preceptos violatorios desde la óptica del marco constitucional se encuentran tres obstáculos interrelacionados que en la práctica jurídica pueden impedir, sino su localización, sí al menos su reforma. Aunque la teoría clásica del positivismo jurídico ha sido fuertemente criticada<sup>7</sup>, en la práctica cabe un positivismo pragmático, un formalismo conservador que consiste en desarrollar interpretaciones de una norma violatoria que justifiquen su validez constitucional y nieguen su carácter transgresor respecto a los derechos humanos.

Por otro lado, se dan conflictos de intereses. Por ejemplo, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) español juran su cargo mediante la fórmula: “Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución Española, lealtad a la Corona y cumplir mis deberes como Magistrado Constitucional”<sup>8</sup>. Está claro que jurar “lealtad a la Corona” no concuerda con la

---

<sup>5</sup> Becerra (2013).

<sup>6</sup> P. ej. Caballero (2013), Cantú (2013), García (2009) y Ovalle (2012) analizan el “arraigo” como caso de norma constitucional mexicana que viola derechos humanos. En sus *Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México* de 2012, “A la luz del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención [contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes], el Comité reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal” (p. 4).

<sup>7</sup> P. ej. Serna (2006).

<sup>8</sup> Art. 21 de la *Ley Orgánica del TC*.

independencia jurídica necesaria para ejercer el cargo cuando se cuestionan normas constitucionales relacionadas con la monarquía<sup>9</sup>.

Finalmente, el uso de criterios jurídicos para resolver aparentes contradicciones normativas puede enmascarar la presencia de una antinomia real e irresoluble. El principio de coherencia de una constitución puede darse como punto de partida necesario para sostener la autosuficiencia y legitimidad constitucional para resolver disputas judiciales. Pero la defensa de tal principio a toda costa, como punto de llegada de cualquier análisis jurídico, argumentando que una norma es constitucional en sentido sustantivo, no formal, “porque está en la constitución”, como si la carta magna fuese un texto jurídicamente perfecto, cuando de hecho es un producto histórico, constituye un planteamiento ideológico que debería ser ajeno a la práctica jurídica, aunque en realidad no lo sea<sup>10</sup>.

El Derecho internacional constituye una segunda estrategia para juzgar preceptos constitucionales en desacato de algún derecho humano. En este caso se supone que entre Derecho internacional y constitución existe un lenguaje común que permite establecer comparaciones y juzgar la conformidad de los preceptos estatales con los derechos humanos. Para tal ejercicio contamos con la DUDH y una diversidad de tratados y jurisprudencia que de ella se han derivado.

En contraste con el juicio constitución vis a vis constitución, la comparativa con el Derecho internacional integra en menor proporción los intereses ideológicos que resultan de la cercanía jurídico-política al baremo de medición. Es más, a pesar de la proliferación de este Derecho, los tratados que lo integran han permanecido estables durante décadas; no representan blancos móviles, criticables por incoherencia o inestabilidad. Aún así, las valoraciones de lo nacional desde el marco internacional no están exentas de conflictos de intereses, politización y otros sesgos<sup>11</sup>.

Existen tres posibles escenarios cuando se contrasta una norma constitucional con el Derecho internacional: compatibilidad, compatibilidad si la norma es interpretada conforme al Derecho internacional e incompatibilidad. Este último caso puede resolverse con una interpretación de conformidad del bloque constitucional al Derecho internacional, lo cual evita la reprobación de la norma, aunque deja pendiente su eventual reforma; o mediante leyes que regulen su aplicación, compatibilizándola con el Derecho internacional<sup>12</sup>.

Una tercera opción consiste en argumentar a partir de un marco construido mediante el Derecho comparado. Como cada constitución no pretende tener validez más allá del Estado que rige, el contraste entre constituciones pareciera no tener relevancia para juzgarlas. No obstante, los argumentos que las cartas magnas o sus interpretaciones autorizadas exhiben sí establecen un diálogo a partir del cual se pueden valorar preceptos, especialmente cuando hallamos normas opuestas en distintas constituciones.

Las tres aproximaciones son válidas y complementarias para desarrollar argumentos que permitan juzgar si la monarquía viola derechos humanos, aunque en esta investigación me centraré en la comparativa con el Derecho internacional.

---

<sup>9</sup> Un caso reciente de conflicto de interés fue la revelación de que el actual presidente del TC español fue miembro del Partido Popular siendo ya magistrado del TC.

<sup>10</sup> P. ej. Caballero (2013, pp. 214-215) sobre la SCJN de México. Acaso no lo sea por el planteamiento reactivo de las atribuciones de los tribunales constitucionales, incapaces de indicar al poder legislativo las reformas constitucionales necesarias para prevenir o solucionar antinomias.

<sup>11</sup> Salazar (2009).

<sup>12</sup> Caballero (2013).

### 3. La igualdad

La hipótesis a argumentar es que la institución monárquica (parlamentaria), en concreto española, viola los derechos humanos de igualdad.

#### Fundamento de los derechos humanos

El concepto de igualdad es central en la teoría y práctica democráticas, por un lado, y en la división histórica entre la Edad Media y la Edad Moderna, por otro. Un siglo antes que Platón y Aristóteles, Heródoto recoge en sus *Historias* un diálogo que refleja que la democracia se diferencia respecto a otras formas de gobierno por la igualdad política entre ciudadanos<sup>13</sup>. Este principio tiene eco en la historia religiosa occidental<sup>14</sup>. Irá madurando con los cambios paradigmáticos que caracterizan la transición al mundo moderno (la Reforma, el capitalismo, la colonización). La *Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano* (1789) destaca que “la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos”, es decir, presume una igualdad en derechos por nacimiento, que explicita en su primer artículo: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”. Ya la *Declaración de Independencia de Estados Unidos de América* (1776) había afirmado que “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales...”.

La historia política se puede concebir como una lucha por la igualdad de las personas, con avances y retrocesos, que toma un giro decisivo a finales del s. XVIII, dejando atrás los privilegios estamentales del Antiguo Régimen como base de la construcción sociopolítica para sustituirlos gradualmente por la democracia y el Derecho internacional, basados ambos en los derechos humanos. Junto con la dignidad humana, la igualdad representa un pilar del paradigma de derechos humanos que emerge a mediados del siglo pasado. Es un principio articulador: no sólo constituye un derecho humano en sí mismo sino que también facilita la definición y cumplimiento de otros derechos<sup>15</sup>.

#### Concepto y tipos

Se puede clasificar el análisis de la igualdad en lógico-lingüístico, filosófico-político y jurídico<sup>16</sup>. A nivel lingüístico, la igualdad es un concepto relacional que establece un vínculo entre al menos dos elementos (sujetos de igualdad) que son iguales respecto a una propiedad compartida (objeto de igualdad)<sup>17</sup>. Por ejemplo, todas las personas son iguales ante la ley indica una relación de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas en la propiedad del trato legal que reciben en un determinado país.

Existe una reciprocidad entre igualdad política e igualdad jurídica. La primera es la base de la democracia y se refleja en normas jurídicas que especifican cómo lograrla. Es decir, la igualdad jurídica garantiza la igualdad política y ésta fundamenta aquella. En un contexto democrático contemporáneo la igualdad es un

---

<sup>13</sup> Bobbio (2001).

<sup>14</sup> P. ej. en el Nuevo Testamento Gál 3, 23-29.

<sup>15</sup> Carbonell (2003).

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ruiz (2003), en concordancia con Westen (1990).

concepto jurídico central y prescriptivo, porque articula el ordenamiento jurídico y porque orienta la acción sociopolítica según y hacia ella misma<sup>18</sup>.

En el plano jurídico, Carbonell (2003) distingue entre igualdad jurídica, mandato de no discriminación, igualdad de género e igualdad sustancial. Rosenfeld (2003) desdobra la igualdad jurídica en mismos derechos constitucionales e igual protección de la ley, y la no discriminación en igual trato e igual consideración, mientras que denomina la igualdad sustancial el principio de igual resultado. La igualdad de género quedaría incluida en los principios de igual trato y consideración. Bilbao y Rey (2003)<sup>19</sup> diferencian entre igualdad formal (jurídica), igualdad real (sustancial o material) y no discriminación, situando la no discriminación como mínimo innegociable y la igualdad real como objetivo condicionado por los medios disponibles.

Estos dos autores matizan que el principio de igualdad no necesariamente se traduce en igualdad de trato, ya que la desigualdad legislativa o judicial puede justificarse con base en criterios “objetivos y razonables” (doctrina de clasificación razonable), si se aplican medios proporcionales a los fines perseguidos. Así pues, resulta correcto practicar una discriminación objetiva, razonada y proporcional con el fin de promover la igualdad real. Y al revés, una aplicación mecánica de la igualdad formal puede en efecto promover desigualdad en la realidad. Por otro lado, los criterios enumerados en el art. 2 de la DUDH o el art. 14 de la *Constitución Española* (CE) para condicionar el trato jurídico entran dentro de “la doctrina de clasificación (normativa) sospechosa”. En este caso, “el examen judicial de control de la diferencia normativa se deberá tornar mucho más riguroso”<sup>20</sup>. En caso contrario, tal trato desigual será discriminatorio y contrario a la dignidad humana.

En el presente análisis seguiré el consenso de clasificación tripartita, igualdad formal, igualdad material y no discriminación, añadiendo una cuarta categoría, la igualdad política (en el marco jurídico), concretamente de participación política, que incluye el igual acceso a cargos públicos. En cada dimensión de igualdad contrastaré los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos con la CE, recurriendo a la jurisprudencia más relevante.

#### **4. La igualdad en la CE y en el Derecho internacional**

##### **Relación entre el Derecho internacional y la CE**

La CE se origina en la transición política de la dictadura franquista a la democracia, con un claro afán de reconstituir el Estado español en una democracia moderna, integrada al orden jurídico-político internacional, con miras a su integración en la Comunidad Económica Europea (luego UE). Así, España firma en 1976 dos tratados adoptados por la ONU diez años antes, el *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, y el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* (PIDCP). En el preámbulo, la CE explicita que uno de sus propósitos es “Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. Para ello incluye una serie de normas que vinculan la carta magna con el Derecho internacional.

Miralles (2009) argumenta la primacía de los tratados internacionales sobre el Derecho interno con base en los artículos 26 y 46 del *Convenio sobre el Derecho de los Tratados* (1969), ilustrándola en el caso español con los artículos

---

<sup>18</sup> Rosenfeld (2003).

<sup>19</sup> Asimismo Fuenmayor (1992) y Falcón (2009).

<sup>20</sup> Bilbao y Rey (2003, p. 111).

constitucionales 10.2 y 96.1, y su pertenencia a la UE, “la cual incluye a los derechos humanos como uno de sus pilares explícitos desde su creación”<sup>21</sup>. Indica este autor que el artículo 95 fue invocado para realizar una reforma constitucional en 1992 porque al Estado español le interesaba someterse al Derecho europeo firmando el *Tratado de la UE*. De hecho, la UE también propició la segunda reforma constitucional en 2011. Por tanto, tanto en su planteamiento inicial como en sus dos reformas el Derecho internacional enmarca y condiciona la CE. No obstante, la doctrina constitucional española sobre la relación entre el Derecho internacional y la CE sitúa la autoridad de aquel bajo la CE pero por encima de las leyes, siendo el artículo 10.2 una norma de interpretación conforme de la CE y leyes respecto a la DUDH y demás acuerdos ratificados por España<sup>22</sup>. Por otro lado, se ha criticado la ligereza con que el TC ha juzgado la competencia de los órganos de control del Derecho internacional, en concreto del Comité de Derechos Humanos, cuando estos condenan al Estado español, ya que la adhesión a los tratados internacionales implica el consentimiento a los mecanismos de supervisión estipulados en ellos<sup>23</sup>.

### Igualdad en la CE

La igualdad es uno de los “valores superiores” del ordenamiento jurídico español, junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político, valores característicos de “un Estado social y democrático de Derecho” (art. 1.1) en el que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (art. 1.2). Existe una diferencia jurídica entre valores y principios. Los primeros establecen la base y fin del ordenamiento jurídico, pero no constituyen normas aplicables; los principios, en cambio, son tanto normas genéricas como fuentes para otras normas más concretas<sup>24</sup>. Así, el valor de la igualdad, entre otros, por un lado orienta el desarrollo del Estado hacia una mayor igualdad<sup>25</sup> y, por otro lado, se concreta en los principios de igualdad formal (art. 14) e igualdad de participación política (art. 23)<sup>26</sup>. Con base en el art. 53.1, todos los poderes públicos están obligados por estos dos artículos y demás derechos fundamentales y libertades públicas. No obstante, el art. 1.3 nos informa que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, cosa que introduce una evidente desigualdad entre el monarca, uno de los poderes públicos, y el resto de la ciudadanía, tanto por razón de nacimiento como de acceso a la jefatura del Estado.

Dadas estas consideraciones previas, procedamos a examinar la monarquía bajo los cuatro criterios de igualdad: dignidad e igualdad sustancial, no discriminación, igualdad ante la ley e igualdad de participación política.

### La dignidad como igualdad sustancial

#### En la CE

---

<sup>21</sup> Miralles (2009, p. 186).

<sup>22</sup> Queralt (2009).

<sup>23</sup> Cuenca (2012).

<sup>24</sup> Fuenmayor (1992).

<sup>25</sup> “[L]a hermenéutica del artículo 1.1 exige una continuidad y dinamismo, pues el Estado de derecho no es algo estático, dado una vez por todas, sino un organismo vivo cuya consolidación requiere una ‘lucha’ continua” (Falcón, 2009, pp. 2-3). En este sentido, “el verbo propugnar [del art. 1.1] significa etimológicamente ‘luchar, combatir, defender, edificar, proteger’ valores” ante amenazas (p. 21).

<sup>26</sup> Otros artículos que toman la igualdad como eje son: 31.1 (sistema tributario), 32.1 (matrimonio), 39.2 (protección de la familia), 139.1 (derechos y obligaciones de todos los españoles).

La igualdad propugnada por la CE se arraiga en la dignidad de la persona y “los derechos inviolables que le son inherentes” (art. 10.1)<sup>27</sup>. Esta dignidad y derechos son iguales en todas las personas, desde su nacimiento hasta la muerte, siendo irrenunciables<sup>28</sup>. “El respeto a esta dignidad es el fundamento de todo Derecho positivo ya sea estatal o internacional; es necesario, pues, acomodar cualquier norma del ordenamiento jurídico a las exigencias de la dignidad de la persona”<sup>29</sup>.

Los derechos inherentes a la condición de persona (derechos humanos) pueden regularse mediante una constitución y leyes (derechos fundamentales), pero no anularse o ser contradichos arbitrariamente. Al contrario, la CE tiene como un propósito en su preámbulo el proteger a los españoles “en el ejercicio de los derechos humanos”. Asumiendo esto, el art. 10.2 vincula la interpretación de los derechos reconocidos en la CE a la DUDH y demás acuerdos internacionales relevantes ratificados por España. Es decir, existe una correspondencia entre la igualdad constitucional y la igualdad del Derecho internacional<sup>30</sup>.

El art. 9.2 insta la obligación del Estado respecto a la promoción de la igualdad sustancial. Aunque este precepto constitucional parece tener escasa operatividad<sup>31</sup>, el artículo refleja una concepción dinámica y proactiva del rol estatal respecto a la promoción de la igualdad material. Estas actuaciones correctoras, si favorecen a determinados colectivos, no pueden tacharse de discriminatorias según el art. 14 sino que, al contrario, siempre que sean razonables, objetivas y proporcionales, pretenden superar desigualdades históricas sustanciales<sup>32</sup>.

En resumen, en la CE la igualdad es un valor superior (art. 1.1) y un principio jurídico, tanto a nivel formal (art. 14) como material (art. 9.2), que el Estado debe proteger y promover. La igualdad deriva de la dignidad igual de las personas, se adquiere al nacer, es irrenunciable hasta la muerte y comporta unos “derechos inviolables que [a la persona] le son inherentes” (art. 10.1) y que, en tanto que reconocidos por la CE, “vinculan a todos los poderes públicos” (art. 53.1).

No obstante, según el art. 56.1, “El Rey es el Jefe del Estado...”. Además, por el art. 57.1, “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica...”. En otras palabras, la jefatura del Estado pertenece, en el sentido de posesión, a una persona no elegida democráticamente por el pueblo en quien reside la soberanía y “del que emanan los poderes del Estado” (art. 1.2) sino asignada hereditariamente, es decir, por nacimiento en una determinada “dinastía histórica”.

Más allá del proceso histórico que desembocó en la formación de monarquías parlamentarias en Europa o, en concreto, de aquel que reintrodujo la monarquía en España, aquí interesa examinar la legitimidad contemporánea de esta institución porque aparentemente viola los derechos humanos de igualdad. Para este fin, a nivel interno se puede cuestionar la coherencia de la CE, aunque el TC utilizando la doctrina del positivismo jurídico se empeñe en construir argumentaciones que nieguen cualquier antinomia. El derecho comparado trae a colación razones que, con peso constitucional en otros contextos, rechazan la monarquía. Pero el Derecho internacional constituye el marco determinante para contrastar y juzgar si en realidad

---

<sup>27</sup> Bilbao y Rey (2003).

<sup>28</sup> Sinopsis art. 1.1. Las sinopsis son los comentarios sancionados por el Estado y se encuentran en la página web oficial de la CE (<http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm>).

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Policastro (2011) ubica la dignidad humana en el centro de la correspondencia entre los principios constitucionales y el Derecho internacional.

<sup>31</sup> Falcón (2009, p. 37).

<sup>32</sup> Sinopsis art. 9.2.



existe tal violación, porque los derechos humanos son patrimonio de la humanidad y, a nivel jurídico, la humanidad se expresa mediante el Derecho internacional.

Dicho esto, del contraste entre la igualdad como valor superior y principio jurídico, por un lado, y la monarquía, por otro, derivan estas preguntas:

- ¿Constituye una violación de la dignidad humana que una persona, heredera de la Corona, nazca con el derecho jurídico a ostentar el cargo público de jefe del Estado, mientras que todos los demás millones de personas nacen sin ese derecho?
- ¿Es compatible el privilegio histórico (con raíces en el despotismo) de una familia para ocupar la jefatura del Estado con el “valor superior” y principio jurídico de igualdad en España, un “Estado social y democrático de Derecho”?

### *En el Derecho internacional*

La igual dignidad humana es la fuente de los derechos humanos<sup>33</sup>. El art. 1 de la DUDH fundamenta este paradigma: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” Ya el preámbulo y art. 1 de la *Carta de Naciones Unidas* de 1945 afirman “la dignidad y el valor de la persona humana” y “(el principio de) la igualdad de derechos”. El preámbulo del PIDCP es claro: “...la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos ... y de sus derechos iguales e inalienables ... que ... se derivan de la dignidad inherente a la persona humana...”. La *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial* (CIEFDR) comienza recordando “los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos”. En la misma tónica se pronuncia la *Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*.

A nivel regional, la *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (CADH) en su preámbulo antepone los derechos humanos al derecho constitucional: “...los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional...”. Es decir, los derechos humanos anteceden y condicionan el Derecho interno. Por su parte, el preámbulo de la *Carta de los Derechos Fundamentales de la UE* afirma que “la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho”. Según el art. 2 de la *Versión consolidada del tratado de la UE*, “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías...”. Asimismo, “La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos” (art. 9).

### *Discusión*

Queda claro que la igualdad en dignidad y derechos por nacimiento es, sino el, un principio supremo del Derecho internacional y, por ende, de la visión antropológica,

---

<sup>33</sup> Habermas (2010).

social y política del ser humano y las sociedades actuales. La patente desigualdad por nacimiento entre el monarca, que nace con derecho al máximo cargo del Estado, y el resto de la población, sin acceso a ese cargo, no puede justificarse recurriendo al paradigma de derechos humanos. El valor jurídico de la “realeza”, según la CE, es superior al de los “súbditos”, privados del linaje “merecedor” de la jefatura del Estado. Tal desigualdad se refleja en el lenguaje de tratamiento del monarca y su familia “real”: “Rey de España”, “Su Majestad” para el monarca (art. 57.1) y su mujer, “Su Alteza Real” para los hijos del monarca y la mujer del heredero<sup>34</sup>. Esta terminología muestra y construye una pretendida diferencia de dignidad humana entre estas personas y el resto de la población, quienes no son ni “majestades” ni “altezas”<sup>35</sup>.

El único alegato a favor de la monarquía parece ser la tradición histórica<sup>36</sup>. Pero, como sabemos, este argumento ha servido para justificar, visto desde el enfoque de derechos humanos, incontables violaciones de la dignidad humana, por ejemplo la esclavitud<sup>37</sup>. En este sentido, un destacado jurista reconoce que el Estado español no tiene como base la soberanía popular, sino la monarquía, cosa que niega la igual dignidad de las personas:

“Esta ‘obsesión monárquica’ que atraviesa toda nuestra historia constitucional es la que explica que la sociedad española no haya podido encontrar una respuesta generalmente aceptada al interrogante sobre el poder constituyente. Cuando se ha propuesto la única respuesta coherente con la naturaleza del Estado Constitucional, la soberanía nacional o popular, no ha sido posible hacer descansar en ella la construcción de un sistema político duradero y estable. La única respuesta que ha tenido permanencia ha sido una respuesta no sólo ‘monárquica’, sino monárquica ‘restauradora’, esto es, anclada en el pasado e incompatible, por tanto, con cualquier tipo de desarrollo ininterrumpido del Estado Constitucional. La institución monárquica

---

<sup>34</sup> Según el diccionario de la RAE, majestad: “Título o tratamiento que se da a Dios, y también a emperadores y reyes”. Alteza: “Elevación, sublimidad, excelencia”.

<sup>35</sup> Según la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, “La Grandeza constituye la máxima dignidad de la jerarquía nobiliaria española, siendo conferida por el Rey a una persona, generalmente unida a un Título del Reino y con carácter hereditario” (<http://www.diputaciondelagrandeza.es/la-diputacion-de-la-grandeza-ampliacion/>). Nótese la utilización de la palabra “dignidad” para diferenciar un estatus social por nacimiento.

<sup>36</sup> Por ejemplo, la página web de la “Casa de Su Majestad el Rey”, sobre “la monarquía en la historia de España”, propone que “La Monarquía ... ha venido siendo de modo predominante la forma de Gobierno, o de máxima organización del poder político, que se ha conocido en España y en sus territorios adyacentes e insulares a lo largo de la Historia”. El fascismo español también utilizó la falacia histórica para promover la monarquía (p. ej. Pemartín, 1937). Más sofisticados son los planteamientos que, evitando la apelación a la tradición, argumentan que la monarquía constituye la necesaria y/o única forma de garantizar una jefatura del Estado políticamente no-partidista (Pérez, 1984) e integradora (Herrero, 2004). Sin embargo, la existencia de repúblicas democráticamente consolidadas con y sin partidismo en la jefatura del Estado (Francia y Alemania, por ejemplo) refuta esta tesis. Por último, relacionado con el no-partidismo y la continuidad histórica, se encuentra el motivo de la “estabilidad” política que supuestamente proporciona un cargo hereditario (Fernández, 1998; Kirkhope, 2007). Choca que en el s. XXI todavía se esgrima la estabilidad, justificación paternalista por excelencia del autoritarismo, para persuadirnos de las bondades de la monarquía. Será porque se trata de formas políticas consustanciales, aunque el monarca parlamentario se revista de democracia.

<sup>37</sup> García (2000).

suponía un límite immanente a la evolución del Estado Constitucional imposible de franquear”<sup>38</sup>.

En esta interpretación, la restauración monárquica franquista fue un hecho consumado, anterior a la CE, que se aceptó sin discusión y que, por tanto, constituye un impedimento al desarrollo constitucional normalizado del Estado de Derecho español.

Cabe concluir que la monarquía (i) viola la igual dignidad humana de la ciudadanía porque impone una desigualdad jurídica arbitraria (basada en la tradición) en los derechos por nacimiento de las personas, y (ii) es finalmente incompatible con un Estado democrático que propugna la igualdad como valor superior (a menos que la igualdad se subordine a la institución monárquica, ante lo cual dejaría de ser un Estado democrático).

### La igualdad como no discriminación

#### *En la CE*

El art. 14 encapsula el principio jurídico de igualdad formal y de no discriminación. La expresión “sin discriminación alguna” confiere a la norma un sentido tajante. Sin embargo, según el principio de especialidad de la teoría positivista, adoptada por el TC, la discriminación de la institución monárquica por razón de nacimiento es legítima. Como lo es la preferencia por el varón en el orden sucesorio de la Corona, previsto en la segunda parte del art. 57.1.

El mandato de no discriminación deriva de la misma dignidad humana; resulta ser la otra cara de la moneda. Una discriminación ni objetiva, ni razonable, ni proporcional violaría este derecho humano. Además, la diferenciación por los criterios establecidos en el art. 14, que han sido copiados de la DUDH, debe atenerse a un examen judicial aún más riguroso, porque se trata de razones sospechosas, con una larga historia en su uso para justificar y practicar la discriminación<sup>39</sup>.

En este sentido, debe preguntarse:

- En el contexto de la CE, dejando de lado la especialidad como principio suficiente, ¿la discriminación monárquica por razón de nacimiento es objetiva, razonable y proporcional al fin perseguido por la diferenciación de trato?
- En el contexto del Derecho internacional, ¿constituye una violación del derecho a la no discriminación que todos los españoles menos uno, por razón de nacimiento, no puedan ser jefe del Estado?

#### *En el Derecho internacional*

La cercanía entre dignidad y no discriminación queda reflejada en el orden de redacción de la DUDH, que sitúa la segunda en el art. 2: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna...”. Los tratados internacionales deben aplicarse sin discriminación social, como también asevera el art. 2.1 del PIDCP.

El Comité de Derechos Humanos ha publicado la *Observación General (OG) N° 18* sobre la no discriminación<sup>40</sup>. Indica que ésta, “junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin ninguna discriminación, constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos” (OG 18, 1). El Comité define discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que

---

<sup>38</sup> Pérez (2003, p. 222).

<sup>39</sup> Bilbao y Rey (2003).

<sup>40</sup> Ver también la OG N° 20, *La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales*, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC).

se basen en determinados motivos ... y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos...” (17). En todo caso, “no toda diferenciación de trato constituirá una discriminación, si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito legítimo en virtud del Pacto” (13).

En las últimas décadas la comunidad internacional ha puesto mucho énfasis en la no discriminación por razón de género, objeto de la OG N° 28 del Comité. El punto 5 reconoce la dimensión histórica del sexismo y concluye que la tradición no representa una excusa válida para justificarlo. Esta desventaja histórica debe corregirse con “medidas contra la discriminación por agentes públicos y privados en todos los ámbitos” (31) y, cuando sea necesario, intervenciones de “discriminación inversa”, concretamente “para promover y asegurar la participación de la mujer en los asuntos públicos y en el ejercicio de cargos públicos” (29).

Ahora bien, la discriminación por razón de género es, como la raza o el color, un tipo de discriminación por nacimiento, ya que se nace hombre o mujer<sup>41</sup>. Por tanto, se establece cierta analogía entre argumentos para la abolición del sexismo y aquellos para la abolición de toda discriminación por razón de nacimiento. Por ejemplo, no se pueden aducir razones históricas para fundamentar la discriminación de trato entre hombres y mujeres, blancos y personas de color, o jefes de Estado hereditarios y demás personas. Ni siquiera una constitución puede legitimar esa discriminación. Así,

“11. El Comité señala que España mantiene sobre la Convención una declaración relativa a las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona española. Si bien parece existir consenso público sobre la eliminación de la preferencia del varón en las normas que rigen la sucesión a la Corona, aún no se ha llevado a efecto la necesaria reforma constitucional para garantizar la igualdad ante la ley de las mujeres y los hombres en materia de sucesión a la Corona, toda vez que están pendientes otras propuestas de reforma constitucional más controvertidas. 12. El Comité alienta al Estado parte a llevar adelante la reforma constitucional y a contemplar en ese contexto el eventual retiro de su declaración sobre la Convención”<sup>42</sup>.

España, ratificó esta convención de 1979 en 1984, pero con la reserva de que “La ratificación de la Convención por España no afectará las disposiciones constitucionales sobre la sucesión a la Corona española”, en concreto, la preferencia del varón sobre la mujer (como así ha sucedido con la preferencia de Felipe Borbón como sucesor, por delante de su hermana mayor, Elena). Aunque su propósito sea distinto (facilitar una ratificación), esta reserva preventiva representa un reconocimiento implícito del Estado español de que en este asunto la CE no es conforme con el Derecho internacional. Siendo el sexismo un tipo de discriminación por nacimiento, la monarquía española también cae en violación de la no discriminación.

Por su parte, la CIEFDR provee una definición de discriminación racial que incluye la preferencia de trato por motivo de linaje (art. 1.1). Recordemos que el diccionario de la RAE define linaje como “Ascendencia o descendencia de cualquier familia”. A partir de ahí, los artículos 2.1 y 5 estipulan el compromiso de los Estados partes de

<sup>41</sup> Con poquísimas excepciones, que no son relevantes para esta discusión.

<sup>42</sup> *Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. España* (2009).

“eliminar la discriminación racial en todas sus formas”. Se trata de un mandato abierto, ante el cual la monarquía debe explicar por qué la objetiva diferenciación racial y política entre el monarca y demás personas no establece un estado de discriminación permanente.

A nivel regional, el art. 21 de la *Carta de los Derechos Fundamentales de la UE* prohíbe “toda discriminación”, entre otros motivos por razón nacimiento. La CADH procura en su art. 1 garantizar los derechos y libertades de las personas de los Estados miembros “sin discriminación alguna”, incluido el nacimiento.

En resumen, la discriminación por razón de nacimiento está tajantemente prohibida en el Derecho internacional, a menos que la diferenciación de trato pueda justificarse como objetiva, razonable y proporcional. En el caso de la monarquía se agrega una noción racial reminiscente de estructuras e ideologías de opresión social relacionadas con divisiones de sangre (esclavitud, nazismo, Apartheid, castas)<sup>43</sup>. La cuestión no es que se trate de “sólo” una familia, o incluso de una persona, sino su existencia y sanción constitucional para monopolizar el máximo (jefatura) cargo público del Estado.

### *Discusión*

Los tres criterios que tanto el Derecho internacional<sup>44</sup> como el TC<sup>45</sup> utilizan para determinar si una diferenciación de trato constituye o no discriminación son: que sea objetiva, razonable y proporcional. La selección por nacimiento a la jefatura de Estado española es objetiva porque sigue criterios objetivamente delineados en la CE (arts. 56.1 y 57). Ahora bien, ¿qué argumentos pueden aducirse para sustentar su razonabilidad? ¿En una democracia contemporánea, en el contexto de la UE y el paradigma internacional de derechos humanos, es razonable excluir a todos menos uno del cargo público más importante del Estado? Las razones históricas (coyunturales, como la supuesta necesidad de una figura de unidad nacional durante la Transición, o estructurales, como el apego a continuar la historia monárquica española) no justifican la discriminación por razón de nacimiento, al menos así lo aprecia el Derecho internacional respecto al nacimiento de mujeres. La discriminación tampoco se justifica apelando a la CE en función del principio de coherencia de la teoría jurídica positivista, porque, como apunta la CADH en su preámbulo, “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”. Y así nos lo enseña la historia de los derechos humanos, que recoge batalla tras batalla social contra normas jurídicas violatorias de tales derechos. En tercer lugar, tampoco puede argumentarse que la exclusión de la población de la jefatura del Estado es una medida proporcional a ningún fin democrático. Los fines enunciados en el preámbulo de la CE no requieren una monarquía, como lo prueba la existencia de otros Estados que persiguen fines similares sin esta institución<sup>46</sup>. En resumen, la diferenciación monárquica por razón

---

<sup>43</sup> Con característico desparpajo, aparentemente ignorante sobre su propia naturaleza, la monarquía española recorre el mundo predicando la igualdad y, concretamente, en un viaje a Perú, la no discriminación racial: “El Monarca... afirmó la superioridad del 'mestizaje de todas las sangres' característico de Latinoamérica sobre 'el peligro de los integristas, que aspiran a imponer el exclusivismo de pretendidas razas, religiones únicas, lenguas puras'” (Egurbide, 2001).

<sup>44</sup> OG N° 20 del CDESC.

<sup>45</sup> Bilbao y Rey (2003).

<sup>46</sup> Otra cosa es la conveniencia de contar con un jefe de Estado electo, discusión que queda fuera del alcance de esta investigación.

de nacimiento es objetiva pero no razonable ni proporcional, lo que constituye una discriminación continua contra el pueblo español.

La jurisprudencia del TC y el Comité de Derechos Humanos sobre el sexismo en la sucesión nobiliaria permite llegar a la misma conclusión de discriminación monárquica. En primer lugar, cabe destacar la prohibición de discriminación por razón de sexo que el TC ha ido elaborando mediante la identificación de las distintas formas de discriminación y la sanción de medidas de acción positiva<sup>47</sup> para combatirla<sup>48</sup>. Sin embargo, el TC ha excluido la sucesión en los títulos nobiliarios del principio de no discriminación de género, justificando la validez de la preferencia sucesoria por el varón por tratarse de una norma anterior a la CE. La sentencia del TC (STC) 126/1997 argumenta que

“...los títulos nobiliarios no engendran privilegios. Son distinciones puramente honoríficas, sin transcendencia en el plano constitucional. No puede considerarse discriminatoria, por tanto, ni la propia existencia de los títulos nobiliarios, ni cualquier condición que para la adquisición hereditaria de dichos derechos se establezca en las cartas de sucesión o en las disposiciones históricas que la regulan. Aquí no está en juego el ejercicio de ningún derecho fundamental (no existe un derecho fundamental a ostentar, poseer o suceder en un título nobiliario). No tiene sentido, en definitiva, aplicar en este ámbito el artículo 14 CE, con la absurda pretensión de ‘modernizar’ una institución configurada siglos atrás con perfiles propios, que deberían respetarse”<sup>49</sup>.

Es decir, “el derecho de los nobles sería resistente frente a la prohibición constitucional de discriminación por razón de sexo por tratarse de un derecho histórico, de escaso significado y, sobre todo, de estricto carácter privado”<sup>50</sup>.

Tres magistrados del TC discreparon. En su voto particular Viver y Vives sitúan la sucesión nobiliaria como norma jurídica sujeta al orden constitucional cuya discriminación por razón de sexo “vulnera frontalmente una de las prohibiciones a las que ... alude el Texto constitucional, otorgando así un relieve acorde con el profundo rechazo que hoy produce este tipo de desigualdad en las sociedades de nuestro entorno cultural”. Es decir, no sólo la CE prohíbe este tipo de desigualdad sino que ésta no es acorde con el contexto cultural contemporáneo.

Por un lado, critican que la STC minimice el impacto jurídico y social del otorgamiento y uso de títulos nobiliarios. La conclusión del TC que “los títulos de nobleza nos sitúan ante un ámbito de relaciones que se circunscribe a aquellas personas que forman parte del linaje del beneficiario de la merced y, por tanto, no poseen una proyección general y definitoria de un status”<sup>51</sup> es incomprensible si se tiene en cuenta, por ejemplo, la fascinación que los medios de comunicación “rosa” y el público tienen por gentes con dichos títulos.

---

<sup>47</sup> Por ejemplo, la desestimación del recurso de inconstitucionalidad contra la paridad electoral en la *Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres* (STC 12/2008).

<sup>48</sup> Bilbao y Rey (2003).

<sup>49</sup> Ibid., p. 162.

<sup>50</sup> Ibid., p. 164.

<sup>51</sup> STC 126/1997, f. j. 12. El párrafo acaba: “...no poseen una proyección general y definitoria de un status, sino ante un simple nomen honoris que implica una referencia a la historia en cuanto símbolo y no posee así otro valor que el puramente social que en cada momento quiera otorgársele”. La última frase, a parte de ambigua (¿quién otorga?), potencialmente contradice el primer razonamiento, ya que si los títulos no poseen una proyección general (lo cual es erróneo, como una revisión de los intereses periodísticos de medios de comunicación “rosa” demuestra) tampoco pueden tener un valor social cualquiera, como de proyección general.

Por otro lado, atacan el razonamiento que la institución nobiliaria, por ser reconocida en la CE, no deba reformar la sucesión sexista. Indican que “una buena parte de las instituciones existentes en aquella fecha [1978] pervivieron con posterioridad a la misma pero no se consideraron inmunes a la Constitución, sino que tuvieron que adaptarse al nuevo orden constitucional”. Argumentan que si, como en caso de la Corona (art. 57.1), estuviese reglamentado el orden de sucesión en la CE, no cabría recurso de inconstitucionalidad ninguno, por aplicarse el principio de especialidad. Concluyen con su rechazo a la posición mayoritaria del TC que la preferencia por el varón es consustancial al orden nobiliario, ya que en realidad es “meramente histórica” y, por tanto, sujeta a reforma por exigencia del art. 14. Y rematan:

“Al atribuir a la naturaleza de los títulos nobiliarios la desigualdad que pertenece sólo a su historia y concebir así la historia ... como una especie de naturaleza petrificada que excluye el cambio, predetermina que la igualdad no le es aplicable, dando por sentado en la premisa lo que a partir de ella se intenta concluir e incurriendo así en una evidente petición de principio”.

En su voto particular el magistrado Cruz utiliza argumentos similares. En primer lugar, recuerda que “los títulos nobiliarios son hoy una institución viva, por no decir pujante” y que desde la entrada en vigor de la CE la concesión de títulos, ligada a la Corona (art. 62.f), tiene “una finalidad pública inobjetable”, lo cual enmarca esta institución como derecho vigente, no histórico. Segundo, razona que se trata de un estamento reformable, que en su totalidad no contradice la CE, ya que ésta no pretendió abolirlos, como indica el art. 62.f. Tercero, indica que la continuidad de la institución nobiliaria dependerá de su capacidad de incorporar “valores que nos resulten más próximos” porque “las exigencias derivadas de nuestra actual Constitución en materia de igualdad son muy superiores a las de las Constituciones decimonónicas”; es decir, el contexto histórico actual resulta relevante para la interpretación de su constitucionalidad. Cuarto, para Cruz no hay duda, con base en la jurisprudencia del TC<sup>52</sup>, de que la igualdad de género constituye un principio jerárquicamente superior a normas anteriores a la CE, como la sucesión nobiliaria sexista. Finalmente, critica la posición mayoritaria que “postula para la institución una impermeabilidad a la historia absolutamente privilegiada” que no gozan otras instituciones que se han tenido que adaptar a la CE.

Veamos ahora el mismo tipo de caso desde la óptica del Comité de Derechos Humanos. En la misma fecha de 2004 el Comité falla en dos casos presentados por mujeres que alegaban discriminación sexista en sucesiones nobiliarias que las dejaban sin título. En ambos casos la decisión concluye de forma idéntica:

“el Comité reitera que el artículo 26 del Pacto es una disposición autónoma que prohíbe cualquier discriminación en cualquier esfera regulada por el Estado parte del Pacto. Sin embargo, el Comité considera que el artículo 26 no puede ser invocado como base para reclamar un título hereditario de nobleza, institución que, debido a su naturaleza indivisible y excluyente, está al margen de los valores subyacentes a los principios de igualdad ante la ley y no discriminación protegidos por el artículo 26. En consecuencia concluye que la denuncia de la autora es incompatible *ratione materiae* con las disposiciones del Pacto, y, en consecuencia, inadmisibles conforme al artículo 3 del Protocolo Facultativo”<sup>53</sup>.

El Comité define, pues, la nobleza como una “institución que, debido a su naturaleza indivisible y excluyente, está al margen de los valores subyacentes a los principios

<sup>52</sup> STC 38/1986 y STC 128/1987.

<sup>53</sup> Comunicaciones N° 1008/2001 y 1019/2001.

de igualdad ante la ley y no discriminación protegidos por el artículo 26". Considera una contradicción apelar a un Pacto con "valores subyacentes" distintos a la institución nobiliaria para reclamar un derecho de nobleza. Considera una incoherencia el pretender aislar para enjuiciar el factor género de una institución "indivisible". Es más, se trata de una institución de "naturaleza excluyente", que emana de valores incompatibles con "los principios de igualdad ante la ley y no discriminación". Aunque indirectamente, el Comité emite aquí, y por duplicado, una condena en toda regla de la institución nobiliaria, cuya cabeza y fuente es la monarquía. Dictamina que la monarquía y todo el estamento nobiliario se sitúan al margen de los valores subyacentes del PIDCP, que de hecho permean el Derecho internacional. Se trata de estructuras violatorias de derechos humanos, cuya "naturaleza indivisible y excluyente" sugiere su abolición, no reforma<sup>54</sup>.

Los votos en disidencia de tres miembros del Comité (dos de los cuales se copian en la segunda decisión, mientras que el tercero se omite) confirman este punto de vista. Tanto el Sr. Rivas como el Sr. Solari-Yrigoyen critican al Comité por haberse extralimitado en sus atribuciones, pronunciándose sobre la naturaleza incompatible de la institución nobiliaria con los valores del Pacto. Rivas interpreta que el Comité identifica una "incompatibilidad de la pretensión de la autora con los 'valores subyacentes' (sic) a los principios protegidos por el artículo 26". Según la Sra. Wedgwood, "Puede interpretarse que esta críptica frase ['una institución que... está al margen de los valores subyacentes...'] da a entender que la continuación de los títulos hereditarios es de por sí incompatible con el Pacto".

En resumen, el TC permite el sexismo en la sucesión nobiliaria porque no ve justificado separar y reformar el factor género de la institución. Así también lo estima el Comité, que define la nobleza como de naturaleza indivisible. Por otro lado, para el TC la sucesión nobiliaria queda fuera del alcance del art. 14 de la CE por ser un derecho histórico anterior a ésta. El Comité concuerda con esta visión ya que establece que la nobleza tiene una naturaleza excluyente, "al margen de los valores subyacentes a los principios de igualdad ante la ley y no discriminación protegidos por el artículo 26". En ambos fallos también coinciden los votos particulares en considerar que la preferencia por el varón efectivamente constituye una discriminación sexista.

¿Y si el TC hubiese determinado que el sexismo nobiliario es inconstitucional? ¿Cómo se podría sostener públicamente (más allá del principio de especialidad, que sólo interesa a juristas) una decisión que moralmente afecta a toda la nobleza, incluida la monarquía, cuando el sexismo sucesorio de la Corona está dispuesto por la propia CE (art. 57.1)? Porque, como recientemente se viene demostrando, la monarquía es una institución que se sostiene por el apoyo popular. ¿Y si el Comité hubiese admitido los dos casos y previsiblemente fallado a favor de las demandantes? El TC quedaría en evidencia y también, por extensión, la monarquía. Aún así, el Comité ha regalado al Estado español una inadmisibilidad envenenada, que, concordando con argumentos del TC, condena la nobleza como excluyente y discriminatoria por naturaleza. Incompatible, en fin, con el valor superior de la

---

<sup>54</sup> El Derecho comparado proporciona argumentos complementarios a la escueta caracterización de la nobleza por parte del Comité. El art. 12 de la Constitución mexicana reza: "En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país". Los comentaristas explican que se trata de una norma coherente con la defensa de la dignidad humana, la igualdad entre personas y la no discriminación (Carmona, 2012; Estrada, 2013). Carmona señala la existencia de disposiciones constitucionales similares en Argentina (art. 16), El Salvador (art. 3), Honduras (art. 60), Uruguay (art. 9) y Venezuela (art. 21).



igualdad. En consecuencia, en el contexto del Derecho internacional constituye una violación del derecho humano a la no discriminación que todos los españoles menos uno, por razón de nacimiento, no puedan ser jefe del Estado.

A modo de epílogo cabe indicar que sólo dos años después del fallo de inadmisibilidad del Comité de Derechos Humanos España aprueba la breve *Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios*, que establece que “El hombre y la mujer tienen igual derecho a suceder en las Grandezas de España y títulos nobiliarios, sin que pueda preferirse a las personas por razón de su sexo en el orden regular de llamamientos” (art. 1). Así, por un lado, los legisladores conforman la ley española al Derecho internacional en materia de igualdad de género, implícitamente repudiando la STC 126/1997; por otro lado, se deja en clara evidencia el sexismo en la sucesión monárquica, que el propio monarca y su heredero apuestan por corregir<sup>55</sup>.

### La igualdad ante la ley

#### *En la CE*

El art. 14 refleja el principio de no discriminación respecto a la igualdad ante la ley, igualdad que constituye un pilar fundamental del Estado democrático y de Derecho. No obstante, la CE dispone que “La persona del Rey es inviolable...” (art. 56.3). Según la glosa sobre este artículo del propio Estado español,

“la inviolabilidad tiene un significado más amplio que el de la irresponsabilidad, con el que se pretende subrayar la alta dignidad que corresponde al Monarca como Jefe del Estado. Como tal, se proyecta en otras normas, de carácter penal o internacional, que atribuyen una especial protección a la persona del Rey. A lo que se añade un status especial de inmunidad en virtud del cual el Rey se sitúa por encima del debate político y al margen de los Tribunales de Justicia. En este sentido, ambos términos significan que no se puede perseguir criminalmente al Monarca y que, en cuanto se refiere a la responsabilidad civil, no se le puede demandar ante la jurisdicción ordinaria”<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Asimismo, el *Informe sobre modificaciones de la Constitución española* del Consejo de Estado en 2006 recomienda “la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono”. Sin embargo, abogar por la paridad de género en la sucesión monárquica es como defender en anteriores tiempos que las mujeres también deberían ser propietarias de esclavos. En este sentido, Torres (2006, p. 55) reconoce que “El principal problema que subyace es el del eventual cuestionamiento de la Monarquía como forma política del Estado español con ocasión de la reforma constitucional que comentamos [de paridad de género en la sucesión a la Corona], sobre todo con ocasión de la celebración del referendo nacional exigido para su aprobación”.

<sup>56</sup> Sinopsis firmada por Abellán y Molina. El penalista Enrique Gimbernat (2012) argumenta en contra de esta interpretación amplia del concepto de inviolabilidad, criticando la no admisión por tribunales ordinarios de dos demandas por supuesta paternidad del jefe del Estado:

“Pero la posición de los dos juzgados madrileños no sólo es indefendible en su fundamentación, sino también en los resultados a los que conduce, porque, si se admitiera que ‘en el ámbito civil [no pueden dirigirse] demandas contra el Monarca’ (así, el auto de 9 de octubre de 2012 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 19, de Madrid), entonces el Rey podría comprar yates o casas sin pagarlos, ir al dentista sin necesidad de abonar sus honorarios o engendrar hijos extramatrimoniales sin tener que reconocerlos, etc., sin que los perjudicados por esos hechos regios pudieran reclamar ante los tribunales civiles la satisfacción de sus legítimas pretensiones, convirtiéndose así España en un lugar en el que habría que distinguir entre una persona que, en sentido estricto, se habría convertido en un ‘fuera de la ley’ (el Monarca) y el resto de los ciudadanos que estaríamos sometidos a los tribunales de cualquier orden jurisdiccional”.

Sobre el mismo tema, Gimbernat (2007).

Ante la posibilidad de un monarca criminal se indica que ello desembocaría en la abolición de la institución. Sin embargo, realidad o posibilidad, el hecho es que la CE sanciona una dignidad superior del monarca respecto al resto de los españoles, la cual le sitúa no “al margen de los Tribunales” sino en verdad por encima de ellos, con inmunidad legal de por vida. En palabras de una especialista en responsabilidades de jefes de Estado, “el que una hipotética actuación delictiva por parte del Rey no pueda ser perseguida no deja de contradecirse con la esencia del Estado de Derecho”<sup>57</sup>.

Sorprende, por tanto, la afirmación del propio monarca que “la justicia es igual para todos”<sup>58</sup> (luego de estallar el escándalo financiero de su yerno). ¿Acaso no sabe que es igual para todos menos él? O, quizás, ¿piensa así aplacar la ira popular contra su yerno, contando con que la vasta mayoría de la población desconoce el art. 56.3? Recientemente, sin embargo, la protección mediática a la Corona se ha erosionado y diferentes medios, de distintas persuasiones ideológicas, han divulgado críticas, más o menos explícitas, de la institución monárquica. A veces los periodistas recurren a expertos jurídicos, que no siempre tienen una intervención afortunada<sup>59</sup>.

En resumen, cabe cuestionar:

- ¿Es compatible la existencia de una desigualdad de trato constitucional por razón de nacimiento para la jefatura del Estado con el art. 14, derivado del Derecho internacional?
- ¿La inviolabilidad monárquica viola la igualdad ante la ley prevista en la CE y dispuesta por los tratados internacionales?

#### *En el Derecho internacional*

El art. 7 de la DUDH establece que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”. El art. 14.1 del PIDCP comienza “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”, cosa que el art. 26 reitera, ligando la igualdad ante la ley a la no discriminación: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley...”. Es significativo y posiblemente no casual que los tres informes presentados por España en virtud del artículo 40 del PIDCP que se encuentran disponibles en línea (2013, 2008 y 1994) omiten una revisión de este artículo.

La OG N° 18 sobre no discriminación explica que “La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos...” (1). Aún más:

“el artículo 26 no se limita a reiterar la garantía ya prevista en el artículo 2 sino que establece en sí un derecho autónomo. Prohíbe la discriminación de hecho o de derecho en cualquier esfera sujeta a la normativa y la protección de las autoridades públicas.... Por consiguiente, al aprobar una ley, un Estado Parte debe velar por que se cumpla el requisito establecido en el artículo 26 de que

---

<sup>57</sup> Serra (2002, p. 171).

<sup>58</sup> Discurso navideño de 2011.

<sup>59</sup> “¿Es entendible en pleno siglo XXI la figura de la inviolabilidad [del monarca]? ‘La gente no lo entiende, y no tiene por qué entenderlo’, según palabras del catedrático. La monarquía, decía, sigue todavía rodeada de un ‘halo de reverencia, de sacralidad’, pero si escogemos tener una, con sus ventajas e inconvenientes, ‘ya sabemos lo que nos ha tocado’; ‘La monarquía es lo que es’, añadía, desatacando entre esas ventajas que ‘el rey no se presenta a las elecciones, no pertenece a un partido y siempre queda como símbolo de la unidad, pase lo que pase’ en el país” (Mariño, 2013). El catedrático describe un pueblo idiota que supuestamente “escoge” tener una monarquía intocable.

el contenido de dicha ley no sea discriminatorio. Dicho de otro modo, la aplicación del principio de no discriminación del artículo 26 no se limita al ámbito de los derechos enunciados en el Pacto”<sup>60</sup>.

Por su parte, la OG N° 32 sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia indica que se trata de “un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley” (consideraciones generales). “El artículo 14 establece garantías que los Estados Partes deben respetar, independientemente de su tradición jurídica y de su derecho interno” (4).

Una vez más, en la introducción de la CIEFDR se lee que “todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación”. Concretamente, “los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico...” (art. 5).

A nivel regional, en la *Carta de los Derechos Fundamentales de la UE*, el art. 20 lee “Todas las personas son iguales ante la ley”. La CADH añade “En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley” (art. 24). El Protocolo N° 12 al *Convenio Europeo de Derechos Humanos* (CEDH), “Considerando el principio fundamental según el cual todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a la misma protección por la ley”, prohíbe la discriminación por razón de nacimiento y otros criterios odiosos (art. 1).

### *Discusión*

Para establecer el favoritismo legal a la Corona no es necesario recurrir a una jurisprudencia internacional, de hecho inexistente, sobre la inviolabilidad de la monarquía española<sup>61</sup>. Basta con analizar la sentencia del caso Otegi Mondragón c. España<sup>62</sup> del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ésta evidencia una sobreprotección jurídica a la monarquía que viola el Derecho europeo, en particular el art. 10 sobre libertad de expresión del CEDH. La fundamentación de la sentencia consiste en establecer si la aplicación de la ley española al Sr. Otegi para el delito de injurias al monarca representa, según el art. 10.2 del CEDH, una “medida necesaria, en una sociedad democrática”. Entre otros argumentos, el TEDH indica que

“para condenar al demandante, los órganos jurisdiccionales internos se basaron en el artículo 490.3 del Código penal, disposición que concede al Jefe del Estado un nivel de protección más elevado que a otras personas (protegidas por el régimen común de la injuria) o Instituciones (como el Gobierno y el Parlamento) respecto a la difusión de información u opiniones que les conciernen, y que prevé sanciones más graves para los autores de declaraciones injuriosas.... A este respecto, el Tribunal ya declaró que una

---

<sup>60</sup> PIDCP, 12.

<sup>61</sup> La inviolabilidad del monarca sí supuso un dilema jurídico cuando España firmó el *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*, que en su art. 27.2 dispone que “Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella”. Dada la dificultad de reformar la CE en relación con la monarquía (CE art. 168), se optó por firmar el tratado sin más, lo que significa una admisión que tal inviolabilidad no es conforme con el Derecho internacional (Serra, 2002).

<sup>62</sup> De 2011, Demanda N° 2034/07.

mayor protección otorgada por una ley especial respecto de las ofensas no se ajusta, en principio, al espíritu del Convenio”<sup>63</sup>.

Aunque esta afirmación se refiere al art. 490.3 del Código penal, también el art. 56.3 confiere una mayor protección que presumiblemente tampoco sería conforme con la CEDH. En cualquier caso, el TEDH ha denunciado la desigualdad legal de la Corona como no conforme con el CEDH<sup>64</sup>.

En otro caso relevante, *Sejdić y Finci c. Bosnia y Herzegovina*<sup>65</sup>, dos ciudadanos, uno gitano y otro judío, demandan al Estado por excluirlos del acceso a la jefatura del Estado y al Parlamento con base en disposiciones constitucionales que establecen el requerimiento de “filiación a los pueblos constituyentes” (Bosnios, Croatas y Serbios). El TEDH, apreciando que el art. 1 del Protocolo N° 12 de la CEDH tiene un alcance más allá de la propia Convención y es aplicable al Derecho interno<sup>66</sup>, sentencia que esto constituye una discriminación violatoria del Convenio, que “se trata de forma diferente, sin una justificación objetiva y razonable, personas en situaciones similares”<sup>67</sup>, en este caso por motivos raciales.

En el caso de la jefatura de Estado española, la CE explicita un trato diferencial del sucesor a la Corona en comparación con el resto de la población española, dado que “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica” (art. 57.1a). Mientras que según la constitución de Bosnia y Herzegovina ni gitanos ni judíos pueden acceder a la jefatura del Estado, en España nadie más que el sucesor monárquico tiene esa prerrogativa. Recordando que la CIEFDR en su definición de discriminación racial incluye la preferencia de trato por motivo de linaje, se puede concluir que la monarquía española viola la CEDH.

En resumen, la monarquía establece una discriminación racial en el acceso a la jefatura del Estado no conforme al Derecho internacional. A esto se le debe sumar su inmunidad ante la ley como otra violación de derechos humanos. Si la igualdad ante la ley “es idéntica al principio de justicia como imparcialidad y significa sobre todo el fin del *ancien régime*, de los estamentos y por ello, de los fueros y privilegios”<sup>68</sup>, vemos que España aún no ha entrado completamente en la Modernidad. Para colmo, como parodia del sistema jurídico español, “Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las leyes” (art. 62.a). La autoridad suprema del Estado, que aprueba, autoriza y publica la ley española, viola la ley internacional y los derechos humanos.

### La igualdad de participación política

#### En la CE

La participación política del pueblo soberano (art. 1.2) es constitutiva de un Estado democrático que además incluye el pluralismo político como “valor superior” (art. 1.1). En la CE esta participación se va concretando en principios y normas jurídicas en los distintos ámbitos y canales participativos característicos de las democracias

---

<sup>63</sup> Ibid., 55.

<sup>64</sup> Otra muestra de la sobreprotección legal a la Corona es su inclusión en el art. 168. Esto la sitúa en materia de reforma constitucional por encima de los demás poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), a la par con las normas constitucionales cardinales (Título Preliminar) y con los derechos fundamentales y las libertades públicas. Así se la blindó de posibles cambios constitucionales (Oliver, 2010).

<sup>65</sup> De 2009, Demandas 27996/06 y 34836/06.

<sup>66</sup> Asimismo OG 18, 12.

<sup>67</sup> *Sejdić y Finci c. Bosnia y Herzegovina*, 42 y 55.

<sup>68</sup> Lucas (1998, p. 178).

contemporáneas. El art. 9.2, aunque vagamente, establece la obligación del Estado para “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Con más precisión, el art. 23 dispone que: “1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos.... 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. Esto incluye la participación en partidos políticos (art. 6), elecciones (arts. 68, 69, 140, 152), referéndums (arts. 92, 151, 167, 168), iniciativas populares (art. 87), jurados (art. 125) y procesos administrativos (art. 105). Los autores de la CE se cuidaron de que el redactado del art. 23 contradijese una jefatura del Estado cerrada al acceso de la ciudadanía. Así, la participación ciudadana directa o mediante representantes es en “los asuntos públicos”, no en las funciones públicas. Y el acceso “en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos” está condicionado por los requisitos legales, que en el caso de la jefatura del Estado establecen una patente desigualdad (arts. 56.1 y 57.1). Con la monarquía conspicuamente ausente de los comentarios sobre el art. 23<sup>69</sup>, nos hallamos frente a un gobierno del pueblo limitado por una jefatura del Estado no electa sino impuesta indefinidamente, es decir, una dictadura en la jefatura del Estado. Hállase aquí otra parodia del régimen político español: el máximo cargo público, símbolo y representación (art. 56.1) de un Estado supuestamente democrático, está mediado por una institución de naturaleza no-democrática y, es más, autoritaria, ya que ejerce su poder sin control popular.

En este sentido, se debe indagar:

- ¿La exclusión de la jefatura del Estado de la participación política ciudadana es legítima según el Derecho internacional o constituye una violación de derecho humano?

#### *En el Derecho internacional*

La DUDH señala, en primer lugar, que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” (art. 21.1). El art. 25.a del PIDCP substituye gobierno por “la dirección de los asuntos públicos”, añadiendo que este derecho no puede limitarse por motivos discriminatorios (especificados en el art. 2) ni “restricciones indebidas”. Ahora bien, el gobierno incluye la jefatura del Estado que, aunque no tenga corte partidista, sí contribuye al gobierno del Estado<sup>70</sup>. Por tanto, este cargo debe estar abierto a la participación directa o por representación. Sin embargo,

“La dirección de los asuntos públicos, mencionada en el párrafo a), es un concepto amplio que se refiere al ejercicio del poder político. Incluye el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo. Abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales...”<sup>71</sup>.

Esto podría interpretarse como excluyente de la jefatura del Estado, aunque en el caso español es un sinsentido argumentar, por ejemplo, que “la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales” (art. 56.1) no formula ni aplica políticas internacionales.

Segundo, “Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país” (DUDH, art. 21.2). El art. 25.c del PIDCP adopta

<sup>69</sup> P. ej. sinopsis, Castellá (2009).

<sup>70</sup> Negar esto en el caso español es una absurdez contraria a lo especificado en CE 56.1, 62 y 63.

<sup>71</sup> OG N° 25, 5.

prácticamente el mismo texto, más el requisito de no discriminación según el art. 2 u otras “restricciones indebidas”. “Cualesquiera condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos amparados por el artículo 25 deberán basarse en criterios objetivos y razonables” (OG 25, 4). Es decir, si “los requisitos que señalen las leyes” (CE 23.2) incluyen, por ejemplo, una limitación por motivo de nacimiento que no es razonable (p. ej. CE 56.1 y 57.1), el Derecho internacional en principio consideraría tal restricción discriminatoria e inaceptable. Luego, como veremos, en la práctica jurídica se aprecia una modulación en la sensibilidad de los jueces según los signos de los tiempos. El género, las razas y etnias constituyen motivos de discriminación que evocan unánime rechazo internacional, mientras que la división de sangre que separa la nobleza de las demás personas (en el fondo constitutiva de una discriminación racial, como lo señala la CIEFDR), todavía no genera ese tipo de repudiación.

Finalmente, “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas...” (DUDH, art. 21.3). Si la voluntad popular, que se expresa mediante elecciones periódicas, es la base de la autoridad de los poderes públicos, cualquier poder cerrado a las elecciones debe justificarse debidamente. En el caso del poder judicial, la justicia impartida por funcionarios meritorios se estima superior a aquella que podría imaginarse mediante jueces populares. Pero ¿sobre qué base se puede asegurar que la familia Borbón producirá jefes del Estado más competentes que cualquier otro ciudadano español? De hecho, este argumento ni puede fundamentar ni, en boca de sus defensores, pretende fundamentar la monarquía.

Ahora bien,

“Cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado, el Pacto impone a los Estados la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos que ampara. El artículo 25 apoya el proceso del gobierno democrático basado en el consentimiento del pueblo y de conformidad con los principios del Pacto”<sup>72</sup>.

Teniendo en cuenta “la naturaleza excluyente” de la institución nobiliaria<sup>73</sup> y la redacción del propio art. 25, parece difícil compatibilizar esta obligación con un régimen monárquico, aunque incorpore elementos democráticos, a menos que subrepticamente se esté apuntando aquí a que el Estado tome medidas para suprimir la propia monarquía.

Para completar la revisión de los tratados más relevantes, se debe incluir la CIEFDR:

“... los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: ... c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas”<sup>74</sup>.

Aunque la distinción de linaje no se incluye explícitamente en este artículo, la definición de discriminación racial anteriormente dada (art. 1.1) sí incluye el linaje,

---

<sup>72</sup> OG N° 25, 1.

<sup>73</sup> Comité de Derechos Humanos, Comunicaciones N° 1008/2001 y 1019/2001.

<sup>74</sup> CIEFDR, 5.c.

por lo que sería incongruente que el art. 5 utilizase otra definición. Evidentemente, “cualquier nivel” incluye la jefatura del Estado, en la que no se puede participar si tiene su acceso cerrado por razón de linaje.

A nivel regional, en su art. 23.1 la CADH adopta el texto del art. 25 del PIDCP y añade que “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal” (art. 23.2). Queda fuera la razón de nacimiento.

En el ámbito europeo, el art. 9 de la *Versión consolidada del tratado de la UE* lee “La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos” (art. 9). En concreto, “El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa” (art. 10.1) y “Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo” (art. 10.2a). Sin embargo, “Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su Jefe de Estado o de Gobierno...” (art. 10.2b). Esto significa que un jefe de Estado no electo y, por tanto, estrictamente no democráticamente representativo, puede representar al Estado miembro en el Consejo Europeo, el órgano estratégico máximo (art. 15), cosa que puede interpretarse como una violación del art. 9. Y es que en Europa occidental, cuna de la UE, se inventó la monarquía parlamentaria y aún subsisten una decena de ellas, en delicada convivencia con una UE republicana<sup>75</sup>. ¿Cómo puede la UE promover principios, normas, y funcionamiento democráticos cuando un puñado de Estados miembros todavía asignan su jefatura del Estado por privilegio nobiliario?

### *Discusión*

La aplicabilidad del Derecho internacional a la igualdad de participación política encuentra un caso directamente relevante en Mazón Costa c. España, sobre el asunto de la compatibilidad de la monarquía española con el art. 25 del PIDCP. En la Decisión del Comité de Derechos Humanos, según la denuncia,

“2.1 El autor afirma ser víctima de una violación del artículo 25, porque la monarquía española no está sujeta a elecciones libres y públicas. Por lo tanto, como ciudadano español, su derecho a votar y a ser elegido Rey de España resulta vulnerado.... 2.3 Por último, sostiene que el reconocimiento en la Constitución española de la inviolabilidad del monarca concede al Rey un privilegio inaceptable y viola el artículo 26, leído conjuntamente con el artículo 14”<sup>76</sup>.

A continuación y con suma brevedad, el Comité despacha el asunto como inadmisible. Comienza:

“3.2 El Comité recuerda que el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, enunciado en el párrafo a) del artículo 25 del Pacto se refiere al ejercicio del poder político. Sin embargo, este artículo no impone ninguna estructura ni un modelo político específico”.

De momento, aseveraciones descriptivas. Prosigue: “El Comité señala, en particular, que una monarquía constitucional basada en la separación de poderes en sí no contradice las disposiciones del artículo 25 del Pacto”. Se trata de una afirmación no

<sup>75</sup> Jessurun (2012), Roobol (2011).

<sup>76</sup> Comunicación N° 1745/2007 (2008).

razonada ni de ningún modo obviamente razonable por el redactado del art. 25 o su interpretación por la OG N° 25, como ya he indicado. Continúa:

“Si bien el párrafo a) del artículo 25 alude a la elección de representantes, el párrafo b) de la misma disposición, que garantiza el derecho a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, no garantiza el derecho a elegir a un jefe de Estado ni a ser elegido para ese cargo”.

Ésta exegesis es lamentablemente concisa e inadecuada. Se apoya en 25.b con un argumento tangencial cuando 25.a y 25.c generan legítimas dudas sobre el hermetismo de la jefatura de Estado monárquica. ¿Y por qué se omite la referencia a 25.c?

El Comité acaba con un non sequitur y una evasiva ligada a una supuesta insuficiencia de pruebas:

“Por lo tanto, el Comité considera que la reclamación del autor es incompatible *ratione materiae* con las disposiciones del Pacto y la declara inadmisble con arreglo a lo dispuesto el artículo 3 del Protocolo Facultativo....

3.3 En cuanto a la afirmación de que la inviolabilidad del monarca le concede al Rey un privilegio inaceptable y viola el artículo 26, leído conjuntamente con el artículo 14 del Pacto, el Comité considera que el autor no ha demostrado que sea víctima de la supuesta violación de acuerdo con el artículo 1 del Protocolo Facultativo”.

Por un lado, atendiendo a la magnitud social, política y jurídica de lo que está en juego en este caso, la respuesta del Comité resulta desconcertante, sino un despropósito. Aún si la denuncia está formulada con ciertas imprecisiones, chocan todavía más las carencias jurídicas del razonamiento del Comité, que parece haber olvidado su propia jurisprudencia sobre la sucesión nobiliaria<sup>77</sup>. Si entonces se rechazaron las pretensiones igualitarias de unas demandantes que querían acceder a títulos de una “naturaleza excluyente”, contraria a los “valores subyacentes” del Pacto, no puede argumentarse ahora que “una monarquía constitucional basada en la separación de poderes en sí no contradice las disposiciones del artículo 25 del Pacto”.

Por otro lado, precisamente debido a las repercusiones políticas que generaría una crítica a la monarquía por parte del Comité, es comprensible cierta propensión a evadir el tema, aunque esto no se pueda reconocer públicamente. Más fácil cortar el proceso judicial de cuajo que admitir una denuncia que pueda desembocar en una decisión o votos particulares controvertidos. Otros factores extrajudiciales a destacar son la posesión de un título nobiliario por parte de uno de los miembros del Comité, un claro conflicto de interés, y la pertenencia de seis de los catorce miembros a regímenes monárquicos o autoritarios, hecho del que no se puede descartar un impacto en tal deliberación<sup>78</sup>.

A pesar de esta Decisión, más política que jurídica, existe un consenso en el Derecho internacional sobre la igualdad en la participación política, con cargos públicos accesibles en condiciones de igualdad, pudiéndose aplicar requisitos si objetivos y razonables. El art. 23 de la CE resulta una simulación de igualdad política en cuanto a la jefatura del Estado, que queda excluida de su alcance y reservada a la monarquía. La razón de nacimiento no constituye un requisito razonable y se

<sup>77</sup> Comunicaciones N° 1008/2001 y 1019/2001.

<sup>78</sup> Hakki (2002, p. 89) opina que “el proceso que lleva a la elección de los miembros del Comité [de Derechos Humanos] es otra característica defectuosa del Comité que daña su autoridad. Necesita ser reformado para permitir el pleno ejercicio de las funciones del Comité, de manera competente y libre de presiones gubernamentales indebidas” (traducción del autor).



condena explícitamente en los tratados internacionales. Por tanto, la institución monárquica viola el derecho humano a la participación política.

## **5. Conclusiones**

El paradigma de los derechos humanos ha emergido como síntesis y respuesta a los logros y atrocidades de la Modernidad. No se trata de una visión independiente y paralela a la democracia sino que ambos enfoques beben de la misma fuente, la dignidad humana, que establece el valor inconmensurable de cada vida y la igualdad de derechos para todas las personas. La relativa autonomía del estado-nación para gobernarse no debe confundirse con su independencia del orden internacional y de los consensos que se recogen en los tratados que articulan el Derecho internacional. En particular, los derechos humanos pueden cuestionar y juzgar normas jurídicas del Derecho interno potencialmente violatorias de la dignidad humana. Hoy en día la legitimidad final de una norma no se halla en su historia, lógica o autoridades sino en su ajuste a los principios democráticos y a los derechos humanos.

La institución monárquica constituye una violación de derechos humanos, concretamente de la igualdad de las personas, desde cuatro puntos de vista distintos. Primero, la monarquía viola la dignidad humana porque impone una desigualdad jurídica arbitraria en los derechos por nacimiento de las personas. Segundo, esta diferenciación de trato monárquico no es ni razonable ni proporcional a la consecución de los principios democráticos, lo que constituye una discriminación continua contra el pueblo soberano. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos condena la nobleza, incluyendo la monarquía, como excluyente por naturaleza e incompatible con el valor de la igualdad. Constituye una violación del derecho a la no discriminación que nadie, excepto una persona por razón de nacimiento, pueda ser jefe del Estado. Tercero, esta discriminación racial (por linaje) en el acceso al máximo cargo público viola el principio de igualdad ante la ley. En el caso español súmase la inmunidad monárquica ante la ley como otra violación de derechos humanos. Cuarto, el Derecho internacional afirma la igualdad en la participación política, con cargos públicos accesibles en condiciones de igualdad. La razón de nacimiento no constituye un requisito razonable y se condena explícitamente. Por tanto, la monarquía viola el derecho humano a la igual participación política.

## **6. ¿Qué hacer?**

Brevemente, sin más pretensión que presentar un esbozo, incumbe responder la pregunta: ¿qué hacer frente a un estatus quo jurídico<sup>79</sup> que perpetúa una institución violatoria de derechos humanos? Existen al menos tres posibles rutas, que son complementarias. En primer lugar, la vía litigante. Ésta requiere un alto grado de motivación, recursos económicos, competencia jurídica y tiempo. Se puede plantear inicialmente en España y, una vez agotados los recursos, en la UE, apelando al TEDH, o ante la ONU, a través del Comité de Derechos Humanos u otros organismos competentes<sup>80</sup>. Por ejemplo, los casos de supuesta paternidad del monarca español acaso podrían terminar con otra sentencia del TEDH declarando

---

<sup>79</sup> A parte de la CE y la jurisprudencia del TC, el oficialismo monárquico está bien arraigado en la academia (p. ej. Alzaga, 1999; Aragón, 2004; Lavilla, 2001; Sánchez, 1986; Torres, 2009), que simplemente omite la monarquía en los estudios sobre la igualdad en el ordenamiento jurídico español (p. ej. Torres, 1998).

<sup>80</sup> López (2004) valora la elección entre el TEDH y el Comité de Derechos Humanos en la presentación de denuncias individuales.

que la sobreprotección legal de la Corona no es conforme con el CEDH, como en Otegi Mondragón c. España<sup>81</sup>. La acumulación de sentencias sobre violaciones de derechos humanos por parte de la monarquía tendrá un impacto en la legitimidad de la institución, más tarde o temprano.

Una aproximación sistémica al asunto del privilegio monárquico (o, en general, nobiliario) identificaría, primero, en qué normas jurídicas, españolas o de otros Estados monárquicos europeos, se violan derechos humanos; luego determinaría qué estrategia judicial tiene mayores posibilidades de éxito, según la norma y la disponibilidad de canales jurídicos, jurisprudencia y/o circunstancias propicias. Evidentemente, esta actividad programática implica la colaboración coordinada de distintos actores y organizaciones.

Una segunda estrategia está conformada por actos de protesta social, que se pueden dividir en desobediencia civil y otros. La desobediencia civil consiste en actos que intencionalmente quebrantan normas jurídicas de forma simbólica, con el objetivo de denunciar la violación de derechos humanos perpetrada por dichas normas o por las estructuras de poder que se apoyan en ellas<sup>82</sup>. En España la desobediencia civil contra la monarquía encuentra un ejemplo reiterado en la quema de imágenes del monarca. En algunos casos, las expresiones políticas colectivas integran cierta desobediencia civil “difusa”, como las declaraciones municipales de que el monarca es “persona non grata”<sup>83</sup> o que la monarquía debe abolirse<sup>84</sup>. Los otros actos de rechazo social incluyen las críticas en redes de comunicación social, las protestas en eventos de la monarquía o las actividades de las organizaciones que pretenden reestablecer la República española.

Finalmente, y este es un aspecto en estado embrionario, debe plantearse la construcción del discurso jurídico-político-social de la monarquía como violatoria de derechos humanos<sup>85</sup>. Aunque cabe desacreditar la legitimidad de la monarquía sin recurrir a los derechos humanos<sup>86</sup>, también toca descubrir y aprovechar la indignación popular que el paradigma de derechos humanos imprimirá a la crítica de la institución. Porque, si la fuerza monárquica radica en su institucionalización constitucional, la inercia histórica y la cuestionable tolerancia de la comunidad internacional, su debilidad consiste en su extrema dependencia del apoyo popular, de la “estima” y el “afecto” que los españoles muestran por la persona o la institución monárquica. No hace falta esperar hasta la llegada de un monarca criminal para cuestionar la viabilidad de una jefatura del Estado cerrada a la ciudadanía. Basta con educar a la población sobre la contradicción entre la monarquía y los derechos humanos.

Conciente de esta debilidad la propia monarquía y sus defensores se han volcado desde la Transición en una campaña propagandística que legitima la institución<sup>87</sup> y la asocia a todo lo bonito y generador de “cariño popular” que podamos imaginar<sup>88</sup>. Sin embargo, la gestión del apoyo popular, por no decir manipulación de las masas, tiene sus límites. Los recientes escándalos relacionados con el monarca y su familia

---

<sup>81</sup> Demanda N° 2034/07.

<sup>82</sup> Capdevielle (2014), Falcón (2009).

<sup>83</sup> Ayuntamiento de Berga y otros (2012).

<sup>84</sup> Ayuntamiento de Viladamat y otros (2011-2012).

<sup>85</sup> Como empieza a hacer Jessurun (2012).

<sup>86</sup> P. ej. Oliver (2002 y 2010).

<sup>87</sup> Zugasti (2005 y 2007).

<sup>88</sup> Barredo (2013), Escudero (2009), Rueda (2011).

han facilitado la emergencia de una crítica pública sin disimulos<sup>89</sup>. Sin embargo, a menudo estas reprobaciones se limitan a señalar pecadillos personales o, cuando tratan lo estructural, no acaban de vincular la institución con la violación de derechos humanos.

En el pentágono (a) derechos humanos, (b) Derecho interno, (c) monarquía, (d) población y (e) representación social de la monarquía, se advierte una contradicción irreconciliable entre derechos humanos y monarquía, que inevitablemente debería conducir a un ajuste del Derecho interno. Éste, no obstante, mediante juramentos de fidelidad al monarca, la teoría del positivismo jurídico y otros factores judiciales y extra-judiciales, se resiste a admitir esa violación. Ahora bien, la llave para solucionar la aberración monárquica está en manos del pueblo, de su repudiación de la monarquía; sólo que éste debe darse cuenta de ello mediante una representación social de la monarquía informada por el paradigma de derechos humanos. Cuando la representación de violación esté suficientemente difundida en la sociedad española, la monarquía caerá por su propio peso y el Derecho interno reconocerá<sup>90</sup>, directa o indirectamente, lo que para muchos en España y en muchos Estados del mundo hoy ya resulta una obviedad: que la monarquía violaba derechos humanos<sup>91</sup>.

## 7. Bibliografía

ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR (1999). La monarquía parlamentaria en la Constitución española de 1978, en *Anales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País* (pp. 445-461). Valencia.

ARAGÓN REYES, MANUEL (2004). Veinticinco años de monarquía parlamentaria. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 24(70), 11-25.

BARREDO IBÁÑEZ, DANIEL (2013). Siglo XXI y monarquía. Propuestas para dinamizar la caracterización informativa del Rey Juan Carlos I. *Área Abierta. Nueva Época*, 2, 1-22.

BECERRA RAMÍREZ, MANUEL (2013). *El control de la aplicación del derecho internacional. En el marco del estado de derecho*. México DF: UNAM.

BILBAO UBILLOS, JUAN MARÍA y REY MARTÍNEZ, FERNANDO (2003). El principio constitucional de igualdad en la jurisprudencia española. En M. Carbonell (Comp.), *El principio constitucional de igualdad. Lecturas de introducción* (pp. 105-202). México DF: CNDH.

BOBBIO, NORBERTO (2001). *La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político*. México DF: FCE.

---

<sup>89</sup> López y Valera (2013), Ramos (2012 y 2013). Por ejemplo, el programa televisivo *Polònia* que satiriza al monarca o los documentales *Monarquía o República* de TV3 y *El Ocaso de un Rey* de Canal Plus.

<sup>90</sup> Existe una circularidad entre las exigibilidades jurídica y social en la que frecuentemente, como en el caso de la paridad de género en la sucesión nobiliaria, la denuncia social basada en los derechos humanos precede y determina la introducción de normas jurídicas conformes.

<sup>91</sup> Durante la redacción final de este artículo, el 2 de junio de 2014, se produjo el anuncio de abdicación del monarca español. En su mensaje al pueblo español el Sr. Borbón indicó que: "Mi hijo Felipe, heredero de la Corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí setenta y seis años consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El Príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la Jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación". Así justificaba la imposición de la lógica dinástica, discriminatoria y antidemocrática (verdadera dictadura en la jefatura del Estado), por encima de los derechos humanos.

CANTÚ, SILVANO (2013). El régimen penal de excepción para delincuencia organizada bajo el test de los derechos humanos. En E. Ferrer Mac-Gregor Poisot, J. L. Caballero Ochoa, y C. Steiner (Coords.), *Derechos humanos en la constitución: Comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana* (pp. 1737-1765). México DF: UNAM.

CAPDEVIELLE, PAULINE (2014). Superar la exclusión: ¿se vale resistir? En E. L. Flores Ávalos (Coord.), *Sin derechos. Exclusión y discriminación en el México actual* (pp. 15-35). México DF: UNAM.

CARBONELL, MIGUEL (2003). Estudio preliminar. La igualdad y los derechos humanos. En M. Carbonell (Comp.), *El principio constitucional de igualdad. Lecturas de introducción* (pp. 9-29). México DF: CNDH.

CARMONA TINOCO, JORGE ULISES (2012). Artículo 12. Comentario. En Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (Ed.), *Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus constituciones. Tomo I* (pp. 890-905). México DF: Porrúa.

CASTELLÁ ANDREU, JOSEP MARÍA (2009). Derechos de participación política y democracia. El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su incidencia en el Derecho Español. En J. L. Caballero Ochoa (Coord.), *La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario* (pp. 335-355). México DF: Porrúa.

COLOR VARGAS, MARYCARMEN (2009). Por el derecho de resistir a los irresistibles Derechos Humanos. En J. L. Caballero Ochoa (Coord.), *La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario* (pp. 429-442). México DF: Porrúa.

CUENCA GÓMEZ, PATRICIA (2012). La incidencia del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno: la interpretación del artículo 10.2 de la constitución española. *Revista de Estudios Jurídicos*, 12, 1-24.

DIENHEIM BARRIGUETE, CUAUHTÉMOC MANUEL (2009). Derechos Humanos y Democracia: principios éticos de un nuevo orden jurídico mundial. En J. L. Caballero Ochoa (Coord.), *La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario* (pp. 43-68). México DF: Porrúa.

EGURBIDE, PERU (2001, 27 de noviembre). El Rey antepone en Perú el mestizaje a la pureza racial o lingüística. *El País*. Recuperado el 4 de junio de 2014 de [http://elpais.com/diario/2001/11/27/espana/1006815619\\_850215.html](http://elpais.com/diario/2001/11/27/espana/1006815619_850215.html)

ESCUADERO JIMÉNEZ, CAROLINA (2009). Televisión y representación pública de la monarquía en España: en torno a la fabricación mediática de los Príncipes de Asturias. *Iberoamérica Global*, 2(2), 63-78.

ESTRADA MICHEL, RAFAEL (2013). El artículo 12 de la Constitución General de la República. Prohibición de títulos nobiliarios. En E. Ferrer Mac-Gregor Poisot, J. L. Caballero Ochoa, y C. Steiner (Coords.), *Derechos humanos en la constitución: Comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana* (pp. 381-393). México DF: UNAM.

FALCÓN TELLA, MARÍA JOSÉ (2009) *Estudios de filosofía jurídica y política*. México DF: UNAM.

FERNÁNDEZ CAMPO, SABINO (1998). La Monarquía y la Constitución de 1978. *Revista de Derecho Político*, 44, 209-224.

FUENMAYOR, AMADEO (1992). Alcance del principio constitucional de igualdad. En J. Hervada (Dir.), *Persona y Derecho. Suplemento Humana lura de derechos humanos*, 2 (pp. 244-266). Pamplona: Universidad de Navarra.

GARCÍA AÑOVEROS, JESÚS MARÍA (2000). *El pensamiento y los argumentos sobre la esclavitud en Europa en el siglo XVI y su aplicación a los indios americanos y a los negros africanos*. Madrid: CSIC.

GARCÍA CAMPOS, ALÁN (2009). Artículo 9: "Nadie podrá ser arbitrariamente, detenido, preso (...)". En J. L. Caballero Ochoa (Coord.), *La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario* (pp. 227-253). México DF: Porrúa.

GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE (2012, 13 de noviembre). La inviolabilidad del Rey. *El Mundo*. Recuperado el 11 de marzo de 2014 de <http://www.caffereggio.net/2012/11/13/la-inviolabilidad-del-rey-de-enrique-gimbernata-en-el-mundo/>

GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE (2007, 1 de agosto). Los privilegios penales de la Familia Real. *El Mundo*. Recuperado el 5 de junio de 2014 de [http://www.iustel.com/diario\\_del\\_derecho/noticia.asp?ref\\_iustel=1024306](http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1024306)

HABERMAS, JÜRGEN (2010). El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos. *Diánoia*, 55(64), 3-25.

HAKKI, MURAT METIN (2002). The Silver Anniversary of the UN Human Rights Committee: Anything to celebrate? *The International Journal of Human Rights*, 6(3), 85-102.

HERRERO RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, MIGUEL (2004). El sentido histórico de la monarquía como forma de Estado (cómo sacar provecho del artículo 1,3 de la Constitución). *Cuadernos de Historia del Derecho*, vol. Extraordinario, 147-161.

JESSURUN D'OLIVEIRA, HANS ULRICH (2012). The EU and Its Monarchies: Influences and Frictions. *European Constitutional Law Review*, 8, 63-81.

KIRKHOPE, TIMOTHY (2007). En defensa de la monarquía constitucional. *Cuenta y Razón*, 146, 43-48.

LAVILLA ALSINA, LANDELINO (2001). La Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado Español. *Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, 5, 3-13.

LÓPEZ GARCÍA, GUILLERMO y VALERA ORDAZ, LIDIA (2013). La información sobre la Monarquía española en los nuevos medios digitales: Eldiario.es y Vozpopuli.com. *adComunica. Revista de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, 6, 65-81.

LÓPEZ MARTÍN, ANA GEMMA (2004). La reclamación individual como técnica de control del respeto a los derechos humanos: ¿comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o Tribunal Europeo de Derechos Humanos? En J. Soroeta Licerias (Ed.), *Cursos de derechos humanos de Donostia-San Sebastián*, 5 (225-260).

LUCAS, JAVIER (1998). Artículo 7. En X. Pons Rafols (Coord.), *La Declaración Universal de los Derechos Humanos: Comentario artículo por artículo* (pp. 174-185). Barcelona: Icaria.

MARIÑO, MIRENTXU (2013, 23 de febrero). ¿Se puede ver envuelto el rey de España en un proceso judicial o es su figura inviolable? *20minutos.es*. Recuperado el 27 de mayo de 2014 de <http://www.20minutos.es/noticia/1376805/0/reynviolabilidad/proceso-judicial/#xtor=AD-15&xts=467263>

MIRALLES SANGRO, PEDRO-PABLO (2009). La primacía de los Tratados internacionales sobre el Derecho interno y la aplicación del Derecho extranjero: Un desencuentro jurídico hispano-mexicano perjudicial para la eficacia de los Derechos Humanos en el Derecho Internacional Privado. En J. L. Caballero Ochoa (Coord.),

*La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario* (pp. 169-201). México DF: Porrúa.

NASH ROJAS, CLAUDIO (2009). La Declaración Universal de Derechos Humanos como parte del proceso de construcción de un consenso superpuesto a nivel internacional. En J. L. Caballero Ochoa (Coord.), *La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario* (pp. 3-21). México DF: Porrúa.

OLIVER ARAUJO, JOAN (2010). La reforma constitucional de la Corona (una propuesta radical y diez moderadas). *Revista de Derecho Político*, 77, 15-69.

OLIVER ARAUJO, JOAN (2002). Cuatro reflexiones sobre la monarquía y la república. *Revista de Derecho Político*, 53, 13-24.

OVALLE FAVELA, JOSÉ (2012). Artículo 16. Comentario. En Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (Ed.), *Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus constituciones. Tomo II* (pp. 12-62). México DF: Porrúa.

PEMARTÍN, JOSÉ (1937). España como pensamiento. *Acción Española*, 18(89), 365-407.

PÉREZ ROYO, JAVIER (2003). Una asignatura pendiente: la reforma de la Constitución. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 23(69), 215-235.

PÉREZ ROYO, JAVIER (1984). Jefatura del Estado y democracia parlamentaria. *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, 39, 7-27.

POLICASTRO, PASQUALE (2011). Dignidad de la persona y principios constitucionales en la época de la globalización. *Persona y Derecho*, 64(1), 175-206.

QUERALT JIMÉNEZ, ARGELIA (2009). El Artículo 10.2 de la Constitución española: elemento de relación privilegiado entre el Derecho Internacional y el Derecho interno. En J. L. Caballero Ochoa (Coord.), *La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario* (pp. 517-526). México DF: Porrúa.

RAMOS FERNÁNDEZ, FERNANDO (2013). El “tabú” periodístico de la monarquía en España. La crisis real y la crisis coyuntural. *Revista Latina de Comunicación Social*, 68, 217-247.

RAMOS FERNÁNDEZ, FERNANDO (2012). Los escándalos de la Corona española en la prensa digital y el futuro de la monarquía. De la amnesia y el silencio cómplice al tratamiento exhaustivo los medios. *Razón y Palabra*, 79.

RIPOLL CARULLA, SANTIAGO (2007). Incidencia en la jurisprudencia del TC de las sentencias del TEDH que declaran la vulneración por España del CEDH. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 79, 309-346.

ROOBOL, WIM (2011). Twilight of the European Monarchy. *European Constitutional Law Review*, 7, 272-286.

ROSENFELD, MICHEL (2003). Hacia una reconstrucción de la igualdad constitucional. En M. Carbonell (Comp.), *El principio constitucional de igualdad. Lecturas de introducción* (pp. 69-103). México DF: CNDH.

RUEDA LAFFOND, JOSÉ CARLOS (2011). Adolfo Suárez y Felipe y Letizia: ficción televisiva y memorias inmediatas sobre la monarquía española. *Hispanic Review*, 79(4), 639-660.

RUIZ MIGUEL, ALFONSO (2003). Sobre el concepto de igualdad. En M. Carbonell (Comp.), *El principio constitucional de igualdad. Lecturas de introducción* (pp. 31-67). México DF: CNDH.

SALAZAR ALBORNOZ, MARIANA (2009). El sistema universal de los Derechos Humanos: de la Comisión al Consejo de Derechos Humanos. En J. L. Caballero

Ochoa (Coord.), *La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario* (pp. 105-143). México DF: Porrúa.

SÁNCHEZ AGESTA, LUIS (1986). La monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 6(18), 9-20.

SERNA, PEDRO (2006). *Filosofía del derecho y paradigmas epistemológicos: de la crisis del positivismo a las teorías de la argumentación jurídica y sus problemas*. México DF: Porrúa.

SERRA CRISTÓBAL, ROSARIO (2002). Las responsabilidades de un jefe de Estado. *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, 115, 155-181.

TORO HUERTA, MAURICIO IVÁN (2005). La apertura constitucional al Derecho internacional de los derechos humanos en la era de la mundialización y sus consecuencias en la práctica judicial. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie*, 38(112), 325-363.

TORRES DEL MORAL, ANTONIO (2006). Fórmulas para el establecimiento de la igualdad sucesoria en la Corona. *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, 54/55, 51-63.

TORRES DEL MORAL, ANTONIO (1998). ¿Que igualdad? *Revista de Derecho Político*, 44, 77-102.

TORRES MURO, IGNACIO (2009). Refrendo y monarquía. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 87, 43-70.

WESTEN, PETER (1990). *Speaking of equality. An analysis of the rhetorical force of "equality" in moral and legal discourse*. Princeton: Princeton University Press.

ZUGASTI, RICARDO (2007). La prensa española de la transición como escenario de apoyo político a Juan Carlos I: el ejemplo de la legitimidad dinástica de la monarquía. *Palabra Clave*, 10(1), 60-70.

ZUGASTI, RICARDO (2005). La legitimidad franquista de la Monarquía de Juan Carlos I: un ejercicio de amnesia periodística durante la transición española. *Comunicación y Sociedad*, 18(2), 141-168.